

“EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL Y LA SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMO GARANTES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS VÍCTIMAS A LA REPARACIÓN EN LOS PROCESOS DE HOMICIDIO CULPOSO DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA LEY 906 DE 2004.”*

Mario William Hernández Muñoz^{**}

* Este artículo de investigación se titula “El incidente de reparación integral y la suscripción de pólizas de responsabilidad civil, como garantes de los derechos fundamentales de las víctimas, para repararlas en los procesos de homicidio culposos, derivados de accidentes de tránsito en la ley 906 de 2004”. Su elaboración se inició el 25/07/2012 y finalizó el 08/06/2013. Hace parte de la asignatura Metodología de la Investigación, impartida en la especialización en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Penal Militar, realizada en la Universidad Militar Nueva Granada.

** Abogado titulado de la Universidad Libre de Colombia, Bogotá, Colombia, 1990, Defensor Público, 1987. Juez Penal Municipal, 1991. Fiscal Seccional Delegado ante los Jueces del Circuito, 2013. Correo electrónico mariowill1234@hotmail.com.

RESUMEN

Mediante el ejercicio del incidente de reparación, se garantiza a las víctimas de una conducta punible su derecho constitucional y jurisprudencial a la reparación integral de los perjuicios generados por el reato. El tema de investigación se enmarca dentro del delito de homicidio culposo, que se encuentra regulado en el artículo 109 del Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000.

En la actualidad, la sociedad se encuentra frente a un importante avance industrial que se ha desarrollado a toda marcha desde la Revolución Industrial (1789) con la creación de un sinnúmero de artefactos y máquinas que hacen más fáciles las actividades de la vida diaria. Un ejemplo importante ha sido la utilización de vehículos automotores, la actividad de conducción es vista por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales como una actividad peligrosa o riesgosa por la gran probabilidad que existe en su desarrollo de transgredir bienes jurídicos tutelados. La normatividad nacional e internacional, ha fijado tres pilares fundamentales, derechos que se deben garantizar a las víctimas: La verdad, la justicia y la reparación. La verdad, se garantiza mediante la labor constitucional en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como ente investigador y acusado; la justicia, está en cabeza del juez natural o constitucional (juez de control de garantías) y los jueces de conocimiento; y la reparación de la víctima, sujeta a la existencia de posibles bienes por parte del indiciado del delito, con los cuales se garantizaría el derecho que le asiste a la misma, a ser reparada. En caso de no existir bienes, los derechos a la reparación, tan solo quedarían como un ideal. Por esta razón la necesidad de fijar la obligatoriedad a quienes conducen vehículos de suscribir pólizas de responsabilidad civil, que garanticen a las víctimas, el pago de unos perjuicios, ya sea en etapas pre procesales o procesales.

PALABRAS CLAVES

Incidente de reparación, víctimas, homicidio culposo, culpa, accidente de tránsito póliza de responsabilidad civil.

ABSTRACT

Through the exercise of incident repair grants victims of crime and jurisprudential legal right to full compensation for the damages caused by the guilt in our theme manslaughter, which is governed by Article 109 of the Colombian Criminal Code Act 599 of 2000, now we are faced with an important industrial progress that has developed into overdrive since the industrial revolution (1789) with the creation of a number of devices and machines that make easier the activities of daily living, a important example of this has been the driving of motor vehicles, such activity has been considered by our Honorable Colombian Supreme Court as a dangerous activity by the great possibility of breaking the legally protected the lives and property of others in development, the rule of law and international standards Colombian protect victims by guaranteeing the rights to truth, justice and reparation, truth is guaranteed by the work of the Attorney General's Office for its work investigating agency and accuser, justice is in head natural judge or constitutional tribunal (guarantees control judge) and trial judges, and the repair of the victim is subject to the existence of any property by the accused of the crime, so which the need for compulsory underwriting liability for driving, to ensure payment of some harm to the victims, which is reflected when the victim directly or through his attorney requested opening incident reparation of the damage.

KEYWORDS

**INCIDENTAL REPAIR, VICTIMS, MURDER, GUILT, TRAFFIC ACCIDENT,
LIABILITY POLICY,**

INTRODUCCIÓN

El artículo titulado “El incidente de reparación integral y la suscripción de pólizas de responsabilidad civil como garantes de los derechos fundamentales de las víctimas¹ a la reparación en los procesos de homicidio culposo derivados de accidentes de tránsito en la ley 906 de 2004”, está relacionado con el área del Derecho Público, específicamente del Derecho Penal Colombiano en su actual Sistema Penal Oral Acusatorio Ley 906 de 2004, y nace de la necesidad de proteger y garantizar de manera eficiente a las víctimas, como resarcimiento de los perjuicios causados por el delito de homicidio culposo regulado en el Art. 109 del Código Penal Colombiano y ss.

El tema escogido en este artículo, está enfocado a determinar cómo se hace más eficiente el ejercicio del incidente de reparación, cuando existen pólizas de responsabilidad civil contractual o extracontractual, que amparen al vehículo siniestrado y la importancia de la presencia de una compañía aseguradora que cumpla con lo fijado en los contratos de seguro, en especial lo fijado en el artículo 1127 del Código de Comercio Colombiano, en cuanto a su obligación de indemnizar a la víctima del delito culposo.

El escrito de igual forma pretende de manera jurídico-propositiva, determinar la suscripción de pólizas de responsabilidad civil extracontractual, para todos los automotores que circulen o ingresen al territorio nacional. Estas pólizas son herramientas que protegen patrimonialmente tanto al indiciado como a la víctima. Al indiciado ya que sus bienes se pueden ver afectados con medidas cautelares y a la víctima le garantiza el resarcimiento de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales.

En la actualidad, se presentan un sinnúmero de accidentes de tránsito que lamentablemente conllevan muchas veces, al fallecimiento de los usuarios de la vía. Estos acontecimientos diarios en la vía pública, por la cantidad, han llegado a tal punto, de considerarse la conducción de automotores, una actividad “peligrosa o riesgosa” por la alta probabilidad que tiene de causar un siniestro, en el cual se pueden ver afectados bienes jurídicamente protegidos como lo son, el bien supremo de la vida, la integridad personal y la propiedad privada.

En nuestro país las altas cortes han reiterado que las víctimas de la comisión de un punible, tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación justa y oportuna por parte de autor del delito.

¹ Según (Arboleda Vallejo), La Víctima es la persona respecto de la cual se materializa la conducta típica mientras que la categoría de “perjudicado” tiene un alcance mayor en la medida en la que comprende a todos los que han sufrido un daño, así no sea patrimonial, como consecuencia directa de la comisión de un delito.

Nuestro tema en particular, es el estudio del delito de homicidio culposo; quiere esto decir que es aquél causado sin voluntad ni intención en el que median unos hechos generadores de culpa: la imprudencia, la negligencia, la impericia y la inobservancia o violación de reglamentos del agente que ejerce la actividad peligrosa, tan importante de mencionar, ya que en ocasiones se confunde el homicidio culposo con el dolo eventual o aquél que es librado al azar; esto cuando se relaciona con los agravantes del Art. 110 del Código Penal Colombiano que hacen referencia al agravante de la conducta, ya sea cuando el conductor involucrado en el delito huya de la escena, cuando se encuentre en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas y que ese estado haya sido la causa por la cual se produjo la conducta por parte del conductor del vehículo.

Finalmente el artículo propone garantizar el derecho fundamental a la reparación de las víctimas del delito de homicidio culposo, derivado de accidente de tránsito, con una argumentación propositiva, tendiente a hacer que el incidente de reparación integral sea una figura que en realidad garantice los derechos de los perjudicados del delito de homicidio culposo, derivado de accidente de tránsito.

El artículo pretende dar respuesta al interrogante que nos plantea, acerca de qué tipo de garantías de resarcimiento de los perjuicios, ofrece el incidente de reparación integral a las víctimas del delito de homicidio culposo derivado de accidentes de tránsito, en el nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio Ley 906 de 2004 y qué tipos de fórmulas puede emplear el legislador, para optimizar su ejercicio por parte de las víctimas.

Dando respuesta a esta problemática se plantea la suscripción obligatoria de pólizas de responsabilidad civil extracontractual para los operarios de la actividad de conducción de vehículos automotores. Dichas pólizas tendrán una suscripción de carácter obligatorio, así como en la actualidad lo es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (S.O.A.T), regulado por el (Decreto 3990 de 2007)

El Código de Procedimiento Penal Ley 906 en su art. 102, establece “... el incidente de reparación integral no es automático sólo procede a petición de la víctima, el Ministerio Público o la Fiscalía aunque siempre a instancia de la primera...” (Cerón Erazo, 2004). Igualmente fija para que se garantice el derecho constitucional y jurisprudencial a la reparación de las víctimas, que éstas ejercerán el incidente de reparación integral, por medio de un representante, por lo cual se determina que deben estar acompañadas de un profesional del derecho o un estudiante del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de la Nación (C.A.V).

En realidad el incidente de reparación integral ha sido concebido por el legislador colombiano, como un mecanismo para garantizar el derecho a la indemnización de las

víctimas de las diferentes conductas punibles, pero como su fin es meramente resarcitorio e indemnizatorio, se supedita a la existencia de unos bienes del demandado o a la suscripción de una póliza de responsabilidad civil extracontractual o contractual, suscrita sobre el vehículo que cause el siniestro. La póliza debe ser suscrita por el propietario o la empresa afiliadora quienes hacen las veces de tomador-asegurado, y la compañía aseguradora que es una sociedad anónima, la cual saldrá al saneamiento o será llamada en garantía a favor del implicado, en caso de hallarse penalmente responsable.

En el desarrollo de este artículo, se busca analizar la normatividad nacional e internacional que se refiere a la protección de los derechos fundamentales de las víctimas del hecho punible, a la reparación justa y oportuna de los perjuicios, a la verdad y a la justicia como fin del nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio. De igual forma, realizar un análisis de la aplicación del incidente de reparación integral en el delito de homicidio culposo derivado de accidentes de tránsito y su desarrollo en la Ley 906 de 2004”.

Para el desarrollo adecuado de la hipótesis, se analizara la normatividad existente, en materia de reparación integral para las víctimas del delito de homicidio culposo, derivado de accidentes de tránsito; de igual forma se propondrán soluciones jurídicas para garantizar con mayor eficiencia, el derecho fundamental a la reparación justa y oportuna de las víctimas del delito de homicidio culposo, derivado de accidente de tránsito, así como también se identificarán los problemas que impiden la material y efectiva reparación integral de las víctimas del delito de homicidio culposo, derivado de accidentes de tránsito. Por último, se pretende establecer las ventajas de la implementación de las pólizas de responsabilidad civil, en el incidente de reparación integral, como mecanismo efectivo y garante del derecho fundamental de las víctimas del delito de homicidio culposo, derivado de accidentes de tránsito, que deban ser reparadas integralmente.

Al desarrollar el artículo de investigación, se evidencia la necesidad de garantizar el derecho que tienen las víctimas de los delitos de homicidio culposo, derivados de accidentes de tránsito, a la reparación integral de los perjuicios causados por el indiciado conductor del vehículo, que ocasionó el accidente de tránsito, cuando se han generado perjuicios a las víctimas, como lo es la muerte de una persona en la vía y los posteriores perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, como el lucro cesante, el daño emergente y las afecciones de índole moral.

Para dar solución a este postulado, se optó por la metodología de análisis documental de tipo jurídico; y se proyectó como una investigación jurídico-propositiva. En el desarrollo del artículo se ha analizado la normatividad vigente que regula este delito, tanto la consagrada en la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004. De igual forma, por vía jurisprudencial y doctrinal, con el análisis de textos de autores nacionales y extranjeros, los

cuales expresan en sus obras, la importancia del derecho fundamental a la reparación de las víctimas de un hecho delictivo culposo o doloso.

La metodología es idónea para el análisis de este tipo de figuras, ya que nos permite inferir los alcances en cuanto la eficiencia que en la actualidad ostenta el incidente de reparación integral, para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a la reparación integral, justa y oportuna de los perjuicios causados con el punible. De igual manera, nos dota de las herramientas, para realizar una propuesta que tienda a mejorar el ejercicio del incidente. Igualmente, se tratarán otras soluciones, como la práctica oportuna de medidas cautelares, para evitar que el indiciado se insolvente económicamente y después queden sin reparación las víctimas.

HISTORIA Y CONCEPTOS BÁSICOS DE VÍCTIMA E INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS PERJUICIOS

En Colombia desde la implementación de la Ley 906 de 2004, nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio, se ha garantizado la participación dispositiva de todos los intervinientes en el proceso, en especial a las víctimas de las cuales se posee un concepto más amplio que en los tiempos de la Ley 600 de 2000, Sistema Penal Mixto, el cual no era tan garantista de los derechos de las víctimas, y su participación se limitaba a la representación que estas tenían por medio de la Fiscalía General de la Nación.

En la actualidad “la víctima, a su vez, tiene derecho a conocer la verdad; a acceder a la administración de justicia, participando en todas las instancias de la actuación penal; a la reparación integral, así como a obtener medidas judiciales de protección, sin perjuicio de acudir ante la jurisdicción civil ordinaria, para efectos de obtener la reparación del daño ocasionado por el delito. La intervención de la víctima en el proceso penal, constituye otra de las particularidades de nuestro sistema procesal penal” (Urrutia Mejía, 2008).

Ahora bien, es de vital importancia en el desarrollo de nuestro texto de contenido científico, definir la condición de víctima y su definición, fijando que “se entiende por víctimas a las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia de acciones u omisiones que violen la ley penal. Igualmente son víctimas los familiares o personas a cargo que tengan relación con la víctima directa y las persona que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o prevenir la victimización. La condición de víctimas se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la relación familiar entre éste y la víctima.” (Gonzáles Navarro, 2005).

La definición de víctima ha alcanzado tanta importancia, que se hace diferencia con los perjudicados; consiste en que “La víctima y perjudicado son conceptos jurídicos diferentes. En efecto la víctima es la persona respecto de la cual se materializa la conducta típica mientras que la categoría “perjudicado” tiene un alcance mayor en la medida en que comprende a todos los que han sufrido el daño, así no sea patrimonial, como consecuencia directa de la comisión del delito. Obviamente, la víctima sufre también el daño, en ese sentido, es igualmente un perjudicado” (Bernal Cuellar, 2004).

Cabe observar, como la Corte Constitucional mediante Sentencia C-250 de 2011, reiteró la importancia que tienen actualmente las víctimas dentro del Sistema Penal, adoptado mediante Acto Legislativo 03 de 2002, precisando que “ellos tienen todos los derechos y garantías procesales frente a la situación que los ha colocado como

intervinientes en un caso determinado, por ello, tienen la facultad de intervención independiente y autónoma de las funciones del fiscal, la potestad de configuración legislativa para la determinación de la forma como ellas harán ejercicio de ese derecho a “participar” en el proceso penal, así como su atribución de actuar en cualquier etapa del proceso penal y no en una etapa investigativa específica, lo que conlleva a no estar limitada para solicitar los derechos que tiene como perjudicado del delito”.

A partir de la Constitución Nacional de 1991 los conceptos dogmáticos de Estado Social de Derecho, que fundamentan su razón de ser en la dignidad del ser humano, todas las áreas del derecho están transversalizadas con los principios y garantías constitucionales a la persona humana. Es así como el concepto de víctima, ha evolucionado para establecer que toda persona que sufra un injusto jurídico, adquiere tal calidad y debe ser reparada integralmente, motivo por el cual el proceso penal cuenta con un incidente de reparación, a fin de que las víctimas obtengan en un solo proceso ante una sola jurisdicción compensación al daño sufrido.

Por ende, las víctimas son comprendidas por todos aquellos que sufren algún tipo de perjuicio con la comisión del punible. En nuestro tema a tratar ese punible es el homicidio culposo, que se encuentra tipificado en el ordenamiento penal en su artículo 109, que hace referencia a la “Ley 599 de 2000, Art. 109 “el que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de dos (02) años a seis (06) años y multa de (20) a (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. “Cuando la conducta culposa, sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente de tres (03) a cinco (05) años” (Arboleda Vallejo, 2009). Del Artículo anterior se determina, que quien por culpa matare a otro, teniendo un sujeto activo indeterminado que con ocasión a la culpa le causa la muerte a un sujeto pasivo indeterminado, se entrará a analizar en qué circunstancias. Se hablará de culpa y en cuáles de dolo.

La culpa como generador de responsabilidad penal se presenta en los siguientes casos: por la imprudencia o acción arriesgada por parte del agente activo en nuestro tema de investigación por el conductor del vehículo que causa el accidente o siniestro, de igual forma se considera como él obrar imprudente es aquel que no está dirigido a causar el perjuicio que sufrió un bien jurídicamente protegido; efecto que el autor hubiese podido evitar de haber seguido las reglas de precaución impuestas para la protección de aquel” (Terragni, 2009),

La negligencia que es el descuido grave e injustificado, la impericia es la falta de los conocimientos empíricos de conducción de automotores y por último la inobservancia o

llamada violación de reglamentos que no hace referencia al desconocimiento de las normas de tránsito por parte del conductor del vehículo que causa al siniestro, por lo cual el delito culposo el resultado debe ser la consecuencia directa de la infracción de cuidado exigible” (Terragni, 2009).

Respecto al punible culposo, es preciso mencionar que “delito culposo, nace siempre y solamente, de las normas indicadas. Su infracción justifica respecto del agente un reproche de ligereza. El juez dice al imputado tú no has sido diligente y cauto como habrías debido. La reprobación de esta manera formulada, es la característica consecuencia del delito doloso; el juez reprocha al reo la violación del hecho prohibido, mientras en el hecho inculpable (el caso fortuito), no puede dirigirse ningún reproche del agente. Considero, por lo tanto que la esencia de la culpa debe encontrarse en la inobservancia de normas sancionadas por los usos o expresamente prescritas por las autoridades con el fin de prevenir resultados dañosos” (Antolisei, 2003). De lo anterior se anota que se presentan factores generadores de culpa que deben ser probados para que se pueda endilgar la responsabilidad penal a un sujeto por el delito de características especiales como las culposas. (Amuchastegui, 2013)

Es la conducción de automotores, una actividad indudablemente humana que ha estado presente en nuestro medio por mucho tiempo y es vista como una máquina que hace más fácil nuestra vida, ya que nos acorta las distancias de una manera eficiente, sin lugar a dudas, indispensable para el desarrollo de nuestra sociedad industrial y comercial, sin embargo es considerada como una actividad peligrosa o riesgosa y esto se debe a la gran probabilidad que en su desempeño, se pueda presentar un accidente en el cual un usuario de la vía se ve afectado en su integridad, al cual denominaríamos **víctima**, quien es parte en el Nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio, aunque al respecto se anote por algunos autores que “no resulta de recibo acoger a la víctima como una “parte” dentro del proceso penal acusatorio” (Molina Arrubla, 2005)

Para integrar el concepto, en palabras de Trazegnies, citado por Valenzuela Gómez Humberto (2001), el accidente automovilístico, “es un daño estadístico e inevitable, el mismo es consecuencia de la vida común, lo cual le da un ingrediente social. A su vez el azar interviene al momento de la individualización de las personas que se ven involucradas en el accidente”. Es así como en la doctrina han evolucionado las definiciones de culpa, víctima, reparación integral, caso fortuito y fuerza mayor, razón por la cual en el tema que nos corresponde en particular, El homicidio culposo derivado de accidente de tránsito es preciso mencionar que “la conducta de operar vehículos es integral y comprende los momentos precedentes, de tal manera que los movimientos automáticos que realiza el

conductor (acelerar, cambiar de velocidades, disminuir la aceleración o frenar) están dentro de la acción global de conducir, que si conjuntamente pueden valorarse como voluntarios, de allí mismo puede inferirse si fueron correctos o imprudentes. Para determinar el análisis de este tipo de elementos se hace uso de las ciencias auxiliares de la física las cuales son cinemática y dinámica, “tanto la cinemática como la dinámica son relevantes en el análisis y comprensión de los accidentes de tránsito, pues son elementos determinantes para hallar no solo factores del accidente, sino del nexo causal” (Fierro Méndez, 2009)

“La denominada regla de la recíproca confianza rige para el desenvolvimiento de actividades peligrosas que son imprescindibles en la vida moderna industrial tales como el tráfico automotor, porque sin ellas se detiene el progreso” (M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego., 1998).

El artículo de investigación, persigue como fin el resarcimiento de los perjuicios causados a las víctimas del delito de homicidio culposo de manera eficiente, con el ejercicio del incidente de reparación, por lo cual se presenta una inclinación a un derecho penal incluyente para con las víctimas como lo determina a sentencia C-209 de 2007, y la sentencia C- 916 de 2002 de la cual se extrae lo siguiente:

“un gran aporte dentro del sistema acusatorio es lo referente al tratamiento y a los derechos que le asisten a las víctimas, -concepto que se amplió-, que no se circunscribe simplemente a una indemnización ya que se le atribuye a otras facultades y derechos, es así que se establece como principio fundamental, y como institución propia del sistema, la justicia restaurativa, la cual busca, como su nombre lo indica, un efectivo restablecimiento del derecho no sólo frente a la víctima sino ante la comunidad por el ilícito cometido. En el desarrollo de esta figura se desprenden figuras como: la conciliación pre-procesal, para delitos querellables, y la mediación para el resto de catálogos de delitos” (sentencia C- 916 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa., 2002).

EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL Y LA PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Luego de la comisión del delito culposo “homicidio en accidente de tránsito”, se debe dar lugar a la investigación penal de manera oficiosa en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, ente encargado de llevar la investigación y de recaudar todos los elementos materiales probatorios, que desvirtúen la presunción de inocencia del indiciado. De igual manera, enterar a las víctimas de los derechos que les asisten, en especial a ser oídas en todas las etapas del proceso penal, ya que el “proceso penal colombiano promete ser interesante, al menos para superar lo que ha sido considerado por algunos como el olvido consciente de quien más tiene que perder en el proceso penal y consecuentemente y con la tradicional fórmula de remitir el problema de la víctima a la legislación civil. (Guerrero, 2005)

Gracias a la experiencia que nos acompaña como operadores judiciales que en la mayor parte de los casos, siguiente a la presencia del delito, no se formula la imputación hasta cuando se hayan recaudado suficientes elementos materiales probatorios, lo que puede demorar entre uno y tres años, tiempo en el cual se ha entregado el vehículo de manera provisional y el conductor indiciado ha tenido suficiente tiempo para insolventarse, de manera que se hacen necesarias las medidas cautelares. “Etimológicamente la palabra medida, en la acepción que nos atañe, significa prevención, disposición; prevención a su vez, equivale a conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. En el campo jurídico, se entiende como tales aquellas medidas que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada en su derecho” (González, 2009).

El Estado colombiano tiende a garantizar los derechos de las víctimas en el ámbito legal. Qué mejor que se garanticen en debida forma. En nuestro tema de investigación se observa que solo cuando se formula la imputación al conductor del vehículo, se aplican las medidas cautelares con una corta duración de seis (6) meses en los cuales el indiciado no puede enajenar sus bienes, cosa que antes de la audiencia seguramente ya ha efectuado, presentándose así un gran obstáculo a las víctimas para garantizar su derecho fundamental a la reparación integral, la cual sólo puede ejercer mediante el incidente de reparación.

Dentro del contexto del Sistema Penal Oral Acusatorio, se hace especial énfasis en la protección de los derechos de las víctimas, que por vías jurisprudenciales se ha dicho son: a la verdad, la justicia y la reparación de los perjuicios causados por el reato. Los derechos a la verdad y la justicia deben ser garantizados por el Estado, mediante las diferentes entidades que intervienen en el proceso penal comenzando por la Fiscalía General de la Nación, los Jueces de Control de Garantías y de Conocimiento y desde

luego, por el Agente del Ministerio Público, mientras que el derecho a la reparación debe ser garantizado por el hallado penalmente responsable, quien debe entrar a reparar ya sea de manera económica o simbólica, los perjuicios que causó a las víctimas. En nuestro tema de investigación, referente a la responsabilidad derivada del homicidio culposo causado en accidente de tránsito, se connota que la reparación se supedita a la existencia de un patrimonio del penalmente responsable, con el cual garantizaría el derecho de las víctimas a la reparación justa e integral de los perjuicios causados.

Sin embargo la reparación de las víctimas puede verse burlada y no garantizada en caso de que el condenado no tenga bienes con los cuales salga al saneamiento de los perjuicios de la víctima, en especial cuando el conductor condenado por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito no cuenta con una póliza de responsabilidad civil, póliza suscrita mediante un contrato de seguro que le permita trasladar ese riesgo a una compañía aseguradora, que en caso de un siniestro, presente antes del inicio de la actividad procesal diferentes formas de arreglo y propuestas de reparación integral a las víctimas, para que garantizado el derecho de las víctimas, se pueda pensar en la aplicación de un principio de oportunidad o de una preclusión por reparación, donde se vería beneficiado el victimario y los deudores solidarios por lo cual en “Colombia está matriculada hace muchas décadas en la aceptación de que los perjuicios causados con la conducta punible deben ser reparados en forma solidaria por los penalmente responsables y los que conforme a la ley sustancial, están obligados a responder (tercero civil) (González, 2009).

Se analiza un desarrollo procesal tendiente participativo y garantista en la protección de los derechos de las víctimas, pero se encuentran serios interrogantes los cuales nos llevan a preguntarnos si en verdad el Estado en su política judicial y criminal ha adoptado las suficientes herramientas para velar por el derecho fundamental de la víctima, y si estas herramientas pueden de alguna otra forma mejorar su papel y labor estricta en búsqueda de la reparación justa e integral de los perjuicios causados con la conducta punible que atenta contra el bien jurídico tutelado de la vida, con ocasión a la conducción de un automotor.

Se determinará el papel de las víctimas en la actuación penal, sus derechos constitucionales, jurisprudenciales, legales y derechos internacionales; qué medios son usados para protegerlos y de qué manera hacerlos más eficientes. Se observa que en la práctica del Proceso Penal Oral Acusatorio, se implementan medidas tendientes a la protección de la víctima, como la llamada “asistencia judicial” que no se refiere a la asunción de funciones de garante de los derechos de una de las posibles partes del proceso, sino que alude a la utilización de remedios judiciales que permitan la asistencia a las víctimas.

Con ello se hace referencia a la necesidad de que alguna autoridad judicial facilite el acceso a los medios judiciales de defensa dirigidos a lograr el cumplimiento temprano de los deberes de protección de los derechos constitucionales de los afectados directos por los hechos punibles. En este orden de ideas, no puede extenderse a los perjudicados, porque sus intereses superan la necesidad de esta atención temprana, pues están directamente relacionados con el resultado del proceso (Bernal Cuellar, 2004).

Para el caso de las medidas cautelares, que son medios garantes de los derechos de la víctima, que deben darse en el menor de los tiempos, toda vez que como lo cita la norma, Código de Procedimiento Penal Colombiano en su Art. 92, es desde la formulación de la imputación que el Juez de Control de Garantías, puede decretar medidas que saquen del comercio los bienes del indiciado que tiendan posteriormente a sanear o a hacer más paliativo el perjuicio causado por el reato a las víctimas, se anota que el articulado nos dice, que el juez natural para conocer de la solicitud es el Juez de Control de Garantías, que se puede solicitar dentro de la imputación o posterior a ella, por parte del delegado de la Fiscalía General de la Nación, las víctimas o por parte del Ministerio Público.

De lo anterior, la solicitud no está restringida a un actor en concreto pero sí tiene la restricción de formular la imputación para ser propuesta al juez. En el delito de homicidio culposos, se observa que las investigaciones para formular una imputación pueden llevar más de dos años, tiempo en el cual el indiciado de la conducta fácilmente se ha insolventado o ha transferido sus bienes, para no verlos sujetos a medidas que los dejarían fuera del comercio, evidenciándose claramente un obstáculo al derecho fundamental de la víctima a la reparación justa y oportuna de los perjuicios, ya que si el indiciado no tiene bienes y su vehículo tampoco cuenta con una póliza de responsabilidad civil, es posible que la víctima o su representante no tengan el medio para hacer efectiva una condena por perjuicios en cabeza del condenado por el punible culposos.

Por este motivo, la propuesta se enfoca en dos circunstancias: la primera, permitir a la víctima debidamente acreditada, la posibilidad de ir ante el Juez de Control de Garantías, aun antes de la formulación de la imputación, para que solicite las medidas de protección patrimonial necesarias, entre las cuales está: solicitar que se limite la negociabilidad de los bienes del indiciado o que éste suscriba una póliza de seguro para suplir los perjuicios que se puedan causar. De igual forma implementar una consciencia de seguro ya que “tradicionalmente se ha señalado que el seguro contra la responsabilidad civil aumenta las probabilidades de reparación para la víctima” (Trigo, 1983),

Tan cierto es que el contrato de seguro es una garantía real para la reparación de las víctimas, que en muchos delitos, cuando el vehículo involucrado está asegurado, se tiende a optar por los medios que establece la justicia restaurativa, para garantizar de manera oportuna la reparación, de la cual se dice “La justicia restaurativa alude a otras formas de reparación de los efectos de los hechos punibles. Comprende mecanismos dirigidos a proteger derechos individuales y a satisfacer intereses colectivos, adoptados en instancias internacionales o en sede se tutela, mediante los cuales, es posible restaurar el orden alterado, merced, por ejemplo a la realización de actos simbólicos que permitan compensar de alguna manera el perjuicio causado y restablecer la confianza en el ordenamiento jurídico (Bernal Cuellar, 2004),.

La justicia restaurativa determina figuras como la mediación y la conciliación que deben ser puestas en marcha por parte de la Fiscalía General de la Nación, y su implementación debe revestir un carácter de procedibilidad, ya que su aplicación puede involucrar una terminación anticipada de la investigación, y garantizar el derecho de las víctimas a una reparación pronta.

Es mediante el incidente de reparación integral de los perjuicios que la víctima y su representante, ejercen su derecho a obtener una reparación por los perjuicios causados por lo cual, es procedente indicar que “el incidente de reparación integral, por su parte es un episodio procesal de gran contenido técnico, en cuanto incorpora la estructuración de una pretensión de reparación integral; la eventualidad de impugnar la negativa al reconocimiento de la condición de víctima: el agotamiento de dos oportunidades de conciliación (Art. 103), así como la posibilidad de practicar pruebas y argumentar sobre el fundamento de las pretensiones (Art. 104). Todas esas actuaciones requieren acompañamiento jurídico del apoderado, y deberá ser la víctima y no el juez, quien decida si designa apoderado que represente sus intereses” (Rojas C. E., 2009).

PROPUESTA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Lo primero a considerar, es que nuestro Régimen Jurídico civil determina que la responsabilidad objetiva, es aquella que se causa mediante un bien riesgoso o peligroso, por el ejercicio de una actividad riesgosa y peligrosa. Quien causa un daño a otro está obligado a repararlo; de aquí la importancia que nuestro actual Código de Procedimiento Penal, le permita a las víctimas sin necesidad de acudir al proceso civil o contencioso, obtener la reparación del daño causado por esta clase de actividad, ya que por el solo hecho de encontrarse un vehículo automotor en movimiento, constituye un peligro potencial y este criterio se ha aceptado por todas las salas de la Corte Suprema de Justicia.

En consecuencia, el estudio realizado, presenta una propuesta jurídico propositiva, en la cual se busca hacer más eficiente el ejercicio del incidente de reparación integral, con la propuesta que busca dar oportunidad a la víctima que antes de la formulación de la imputación, pueda acudir ante un Juez de Control de Garantías, para solicitar medidas cautelares en pro de que el indiciado, futuro condenado no se insolvente. Igualmente, luego de hacer referencia al deber objetivo de cuidado y a la actividad peligrosa que involucra conducir un vehículo, conducción que en nuestra propuesta debe estar supeditada para su ejercicio, a la suscripción de pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, suscripción que más que amparar al conductor, también lo hace con los terceros civiles que puedan vincularse al proceso penal. Se podría decir entonces de la eliminación de la denominada auto retención del riesgo, que consiste en que el operador conductor del automóvil, en un posible accidente que llegare a causar, responde con su propio patrimonio por los perjuicios que llegare a causar, en la labor de conducción.

Se connota entonces, la importancia de la figura del tercero civil responsable, que es considerada “una institución jurídica que permite a las víctimas, participar como sujetos en el proceso penal. El carácter civil de la parte, ha sido entendido en el sentido meramente patrimonial pero en realidad puede tener una connotación distinta puesto que refiere a la participación de miembros de la sociedad civil en un proceso conducido por el Estado (José Armando Ruíz Salazar).

El tercero civil es llamado en garantía por parte del conductor del vehículo siniestrado; en tal caso sería citado el representante de la empresa de transportes, en la cual su vehículo está afiliado; el conductor haría este llamado a la empresa transportadora como tercero civil responsable, pues “sin haber participado en la comisión del hecho

punible, tiene la obligación de indemnizar los perjuicios conforme al Código Civil (Art. 107)” (Espitia Garzón, 2010).

Por las razones antes expuestas, se habla de la necesidad de la suscripción del seguro de responsabilidad civil para los operadores de la actividad peligrosa de conducción de vehículos. Esta necesidad, se justifica en el hecho de proporcionar a las víctimas su derecho fundamental a la reparación. No es desconocido que actividades como la conducción de motocicletas está a punto de considerarse un problema de salud pública, debido al amplio margen de siniestralidad que se presenta en la conducción de este tipo de vehículos; conductores que en la mayor parte de los casos no poseen los recursos necesarios para reparar los perjuicios a las víctimas, por lo cual “el camino idóneo para proveer recursos con tal propósito es el seguro de responsabilidad. Sin embargo, potenciales responsables, a pesar de que las primas se encuentran a su alcance, no siempre deciden tomar los correspondientes seguros de responsabilidad, razón por la cual el Estado interviene con el objeto de obligar el aseguramiento de determinadas actividades” (Ortiz, 2006), como en la actualidad es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, la propuesta de este artículo es asegurar todos los vehículos que circulan en el territorio nacional y los que ingresen provenientes de otros países, con pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, para cuidar y prevenir la afectación al patrimonio propio del conductor involucrado. Igualmente proteger los derechos de las víctimas, a la reparación integral justa y oportuna de los perjuicios,

Teniendo en cuenta se debe hacer un cruce de información entre las instituciones y las empresas aseguradoras, con el fin de crear una política clara y cierta sobre ello.

Se observa que el legislador ha impuesto el aseguramiento obligatorio de algunas actividades relacionadas con la conducción, como la suscripción por parte de los vehículos de servicio público, que deben contar con pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, pólizas que en la mayor parte de los casos tienden a garantizar a las víctimas su derecho fundamental a la reparación. “Esto satisface la función misma del seguro contra la responsabilidad civil, cuyo desarrollo evidencia un indisimulable favor orientado hacia la víctima” (Trigo, 1983).

En el ejercicio del incidente de reparación, la pretensión en el escenario del incidente de reparación integral, es lo que desea hacer valer la víctima o perjudicado por medio de unas pruebas y conseguir que el Juez declare en una providencia, que la solicitud del accionante es válida y como tal, genera a su favor que le reparen en forma integral el objeto de su pretensión. Lo que permite formular la pretensión es que el sentido del fallo

anunciado sea de condena, y su calidad de víctima, producto del hecho por el cual se condena, le legitima para presentar la pretensión, lo que la víctima o el perjudicado quieren que el juez les declare a su favor (González A. , 2009).

Los argumentos son convincentes y aún más lo son las estadísticas y las noticias diarias de conductores que huyen de las escenas. Todos estos son factores que se podrían remediar suscribiendo pólizas de responsabilidad civil, que amparen al conductor y los perjuicios que pueda causar a los demás usuarios de las vías. La propuesta de suscripción obligatoria de pólizas de responsabilidad civil para los vehículos que circulan por el territorio nacional, aliviaría el alto costo de las primas que en la actualidad desestimulan a los conductores para adquirirlas, ya que al tener una segurabilidad alta en cuanto al número de tomadores el costo de estas primas disminuiría.

CONCLUSIONES

Los hallazgos encontrados en el desarrollo de la presente investigación son los siguientes:

- En este artículo se ha comprobado que la conducción de automotores es una actividad peligrosa en el desarrollo de la cual, se genera una serie de daños que terminan en unos perjuicios que se le causan a los usuarios de las vías, quienes al resultar afectados se denominan víctimas que son sujetas de unos derechos fundamentales que no son otros que a la verdad, la justicia y reparación.
- En el estudio realizado a la normatividad vigente, que regula la conducta del homicidio culposo derivado de accidentes de tránsito y la regulación del proceso penal que se adelanta con ocasión a éste, se logró determinar que la víctima tiene un derecho fundamental a la reparación, que se garantiza mediante el ejercicio del incidente de reparación integral, y mediante la solicitud de parte de las víctimas de medidas cautelares sobre bienes del indiciado de la conducta penal, reparación que se supedita a la existencia de un patrimonio por parte del indiciado.
- En la investigación se determina que la víctima del reato de homicidio culposo tiene derecho a demandar por vía civil o de continuar el proceso penal adelantado de manera oficiosa, mediante la investigación que está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Todo con el fin, de que sean garantizados sus derechos fundamentales, tendientes a que se reparen los perjuicios causados; sin embargo, debido a la duración de esta clase de procesos, el indiciado tiende a insolventarse viéndose claramente desdibujada la figura de la reparación justa y oportuna de los perjuicios causados.
- Con la investigación se demuestra, que mediante la suscripción de pólizas de responsabilidad civil extracontractual, para la actividad de la conducción con la suficiente cobertura para los diferentes perjuicios (materiales e inmateriales), se puede garantizar una reparación justa, oportuna e integral, a las víctimas del reato de homicidio culposo derivado de accidentes de tránsito.
- Dentro de la investigación, se pudo reconocer que el proceso penal garantiza los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, mientras que el derecho fundamental a la reparación, queda supeditado a la existencia de solvencia económica por parte del hallado responsable de la conducta penal, por lo cual nace la necesidad de

garantizar este derecho fundamental, mediante la suscripción de una póliza de responsabilidad civil extracontractual o contractual.

- El trabajo de investigación, plantea la necesidad de eliminar la figura denominada autorretención del riesgo, por parte de quien ejecuta la actividad peligrosa (conducción del vehículo automotor), figura que nos indica que es el causante del siniestro, debe resarcir con su propio patrimonio, los perjuicios causados en el desarrollo de la actividad peligrosa, lo cual se puede prevenir con la suscripción de la póliza de responsabilidad civil extracontractual o contractual.

- La investigación condujo a afirmar que debido a la alta siniestralidad que se presenta en todas las vías del país, es muy conveniente la suscripción de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual o contractual para quien ejerce la actividad de conducción de vehículos motorizados.

- Se traduce de la investigación, que la suscripción de esta clase de pólizas, es una figura garante de los perjuicios causados a las víctimas de los accidentes de tránsito que ocurren en el país. De igual manera, su viabilidad está dada a que el legislador regule la suscripción de pólizas y determine su obligatoriedad para conducir un vehículo, con lo cual el valor de las primas sería más asequible a los conductores de los diferentes vehículos.

- Para finalizar, el artículo titulado “El incidente de reparación integral y la suscripción de pólizas de responsabilidad civil como garante de los derechos fundamentales de Las víctimas a la reparación en los procesos de homicidio culposo derivados de accidentes de tránsito en la Ley 906 2004.” es una respuesta positiva a una necesidad actual que requiere una regulación especial de parte del gobierno nacional, y genera una respuesta a la hipótesis planteada en el aspecto que la víctima podrá tener derecho a la verdad y a la justicia, pero nada le garantiza que va a ser reparada de manera integral que solo se garantiza, mediante la suscripción de una póliza de responsabilidad civil extracontractual o contractual, en la cual quien ejecuta una actividad peligrosa transfiera ese riesgo a una compañía de seguros la cual será llamada a responder por el derecho de las víctimas a la reparación de los perjuicios.

BIBLIOGRAFÍA.

Francesco Antolisei, manual de derecho penal, 2003.

Arboleda Vallejo, Mario Régimen Penal, 2008.

Arboleda Vallejo, Mario. José Armando Ruíz Salazar, Manual de Derecho Penal, décima edición. Editorial Leyer.

Bernal Cuellar Jaime, Eduardo Monte alegre Lynett, El Proceso Penal, Fundamentos Constitucionales en el Nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio, 2004.

Carlos Mario Molina Arrubla. Principio de Protección a las Víctimas, editorial Biblioteca Jurídica Diké 1ª edición. 2005

Cerón Erazo, Leonardo Efraín, La víctima en el Proceso Penal Colombiano, 2004.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego, sentencia julio de 1998, referencia del expediente 12224.

Corte Constitucional Colombiana, sentencia C- 916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Díaz Granados Ortiz, El seguro de responsabilidad, Editorial Universidad el Rosario, 2006.

Espita Garzón, Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Penal Sistema Acusatorio, Editorial Legis. Colombia. 2010.

Farcía Amuchastegui, Sebastián, 2013.

Fierro, Méndez, Heliodoro, El Accidente de Tránsito, 2009.

González Navarro, Luis Antonio, sistema de juzgamiento penal acusatorio. Bogotá: Editorial Leyer. 2005.

González, Antonio, La Justicia Restaurativa y el incidente de reparación, editorial Leyer, 2009, Bogotá D.C,

Guerrero, Oscar Julián, Fundamentos Teórico Constitucionales del Nuevo Proceso Penal, 2005.

Le Tourneau, Philippe. La Responsabilidad Civil Profesional. Editorial Legis, 2006.p. 95. Traducción de Javier Tamayo Jaramillo.

Molina Arrubla, Carlos Mario, Principio de protección a las víctimas, 2005

Rojas López, Carmen Edilia Justicia Restaurativa en el Código de Procedimiento Penal Colombiano, ediciones Doctrina y Ley, Bogotá D.C. 2009.

Terragni, Marco Antonio, Dolo Eventual y Culpa Consciente, Editorial Rubinzal-Culzoni, Argentina.

Trigo Represas. Félix A, Stiglitz S. Rubén. El seguro contra la responsabilidad civil profesional del médico. Editorial ASTREA. Buenos Aires 1983.

Urrutia Mejía, Hernando, Cuesta Hoyos, Francisco. Sistema Penal Acusatorio Audiencias Preliminares y Juicio Oral, Editorial Ibáñez, Tomo I, 2008, Bogotá- Col.

Velásquez, V. Fernando, Derecho Penal, 2009.

<http://www2.ohchr.org/spanish/law/delitos.htm> Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Visitado por última vez el 15 de julio de 2012.

Valenzuela Gómez Humberto. Responsabilidad Civil por Accidentes de Tránsito y Seguro Obligatorio. Una aproximación desde el análisis económico del Derecho. Colombia 2001. Página 125.

Código de Procedimiento Penal, Oscar Arturo Toro Lucena, ed. Nueva Jurídica 2013, pág. 676.